

## CENTROAMERICA EN LA BANCARROTA ECONOMICA Y SOCIAL

Estados Unidos no ha podido ayudar a resolver ni a aminorar la profunda crisis económica y social de Centroamérica, a pesar de su abierta intervención y su voluminosa inversión de dólares en el área. Más bien, parece haber contribuido a lo contrario, a pesar de su retórica.

Los dirigentes políticos liberales hondureños que recibieron con los brazos abiertos la enajenación de su soberanía política y militar, creyeron, como lo hicieron sus antecesores ingenuamente con las bananeras, que la intervención norteamericana les dejaría como ganancia el desarrollo económico tan postergado. Pero la realidad ha sido muy otra y el desengaño duro. Estados Unidos ha militarizado Honduras invirtiendo millones de dólares que no han beneficiado en nada a la crítica economía nacional. Sólo los bares, los centros nocturnos y las prostitutas han obtenido beneficio de los dólares norteamericanos; pero no sin pagar el costo en enfermedades contagiosas desconocidas hasta ahora en el país.

Según un informe del primer trimestre de 1984, las autoridades hondureñas aceptan el deterioro de la economía. Sus esperanzas en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe se han esfumado, pues los mercados norteamericanos sólo están abiertos a algunos productos; pero los productos tradicionales siguen sujetos a cuota. Debido a las nuevas presiones del FMI, los créditos externos de Honduras permanecen congelados hasta que no se llegue a un acuerdo con el fondo y también con AID. En estos momentos la deuda externa de Honduras asciende a 2 mil millones de dólares. Presionado para reducir el gasto público, el gobierno hondureño ha insistido en la implantación

de nuevas cargas impositivas, reducción en las partidas para los proyectos sociales, congelación de salarios y devaluación de la moneda.

En un ambiente cargado de rumores de golpe de Estado o insinuaciones de un regreso del general Martínez, se conjuró una huelga de trabajadores anunciada para el 20 de junio en protesta por los nuevos impuestos anunciados. El presidente Suazo, horas antes del inicio de la huelga, se comprometió con la directiva de la Confederación de Trabajadores de Honduras (de tendencia derechista y pro-norteamericana) a realizar reformas al decreto que reglamentaba los nuevos impuestos a cambio de suspender la huelga. Este movimiento huelguístico puso de manifiesto la inestabilidad del gobierno liberal.

Pero la crisis económica persiste con un creciente déficit fiscal y las presiones del FMI; por lo tanto, el gobierno deberá iniciar una difícil etapa de negociaciones ya que no puede pensar en una suspensión total del paquete de impuestos, menos cuando los créditos externos habían comenzado a fluir a consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno. Hasta ahora las fuerzas interventoras no han sido capaces de formular planes para enfrentar y superar esta crisis.

Esto es así porque su interés prioritario es lo militar, el uso del territorio hondureño con fines militares según los planes de defensa norteamericanos. Sin embargo, tampoco aquí van bien las cosas. El militar hondureño clave para implementar la ocupación de Honduras por el ejército norteamericano cayó víctima de un movimiento de oficiales jóvenes descontentos con la forma de conducir los asuntos internos del ejército. La em-



bajada norteamericana fue consultada tardíamente, pero dio su beneplácito al encontrar razones suficientes en la independencia del general Alvarez respecto a los asesores norteamericanos.

Dentro de la oficialidad hondureña existe un creciente malestar porque los asesores norteamericanos han estado entrenando el doble de soldados salvadoreños que hondureños. Proporcionándoles además la ventaja de conocer el terreno hondureño y las zonas en disputa con el gobierno salvadoreño, lo cual desconocían por completo cuando lanzaron la invasión contra Honduras en 1969. Los oficiales hondureños no se fían de los salvadoreños. Asimismo exigen que se arregle de una vez por todas la situación de las zonas disputadas entre ambos países. Por otro lado, la segunda fase de las maniobras Granadero I terminaron a mediados de junio en un ambiente de protestas y presiones para que el ejército norteamericano abandone definitivamente Honduras.

Los cambios en la cúpula militar han repercutido favorablemente en el auge del movimiento popular, el cual ha perdido el miedo de los dos primeros años de régimen liberal. El movimiento popular ha vuelto a la calle para expresar su repudio. Cada vez más se advierte el deseo de muchos hondureños de no permanecer pasivos ante la crisis económica. El creciente descontento no sólo tiene carácter reivindicativo, sino también político. Simultáneamente ha aparecido en el movimiento popular el repudio abierto a la presencia norteamericana.

Costa Rica también se encuentra atrapada en la crisis económica, la cual está poniendo en serio peligro su propagandizada y ejemplar democracia y su dudosa neutralidad en el conflicto

centroamericano. El FMI y AID siguen presionando cuando Costa Rica busca desesperadamente mantener la precaria estabilidad económica lograda para arrancar con su programa de reactivación. Mientras tanto el colón ha sufrido otra caída. Los apuros económicos han obligado al gobierno costarricense a plegarse a las directrices de la administración Reagan, estirando y encojiendo el concepto de neutralidad según la conveniencia de la Casa Blanca. Los ansiosos deseos de ésta de involucrar a Costa Rica en el conflicto regional quedaron en evidencia cuando sectores económicos y políticos y la prensa conservadora quisieron empujar al gobierno a romper relaciones con Nicaragua. Entonces, la Casa Blanca muy solícitamente ofreció sus servicios para formar un ejército costarricense.

Para compensar la difícil situación interna, donde el endeudamiento externo es la dificultad más grande, el presidente Monge, acompañado de una selecta comitiva, realizó una ofensiva diplomática ("operación verdad") en Europa occidental. Con esta ofensiva, el presidente buscaba apoyo político y económico, cosas que le hacen mucha falta para neutralizar las presiones norteamericanas que quieren que abandone su ambigua neutralidad respecto a Nicaragua. Consistente con su ya característica ambigüedad política y teniendo muy en cuenta la orientación política de su interlocutor, el presidente Monge justificó a Nicaragua en la socialdemócrata España, pero la acusó en la democristiana Alemania. De ambos gobiernos obtuvo promesas de ayuda económica.

Durante el resto de su gira, el presidente Monge fue adecuando su discurso según el gobierno visitado. Así afirmó su independencia

política de Reagan, pero luego atribuyó los problemas centroamericanos a la ideología sandinista y a la intervención soviética-cubana en el contexto de la doctrina este-oeste. Abogó por el reconocimiento internacional de la contrarrevolución nicaragüense y se convirtió en el mejor embajador itinerante de Duarte. Sin embargo, no logró convencer a todos: recibió oposición popular en Holanda, oficial en Francia, internacional en Ginebra y social-demócrata en Suiza. Al final, el apoyo económico conseguido es débil.

La neutralidad costarricense sigue siendo muy dudosa al permitir libremente las actividades militares de ARDE y del FDN contra el gobierno de Nicaragua. Estas actividades han llevado a continuos incidentes fronterizos donde se han visto involucrados miembros de la guardia civil. Mientras tolera estas actividades, invoca la neutralidad para impedir el desembarco de equipo militar destinado al gobierno de Nicaragua, sin duda cediendo a las presiones norteamericanas.

Nicaragua se ha visto obligada a reorientar su economía convirtiéndola en una economía de guerra. Los ataques de la contrarrevolución abiertamente defendida y financiada por la administración Reagan han obligado a decretar una serie de medidas sobre la producción y distribución de los productos alimenticios. Los más de tres años de guerra iniciados por grupos anti-sandinistas y somocistas desde Honduras y por ex-sandinistas desde Costa Rica, han causado severos daños en la infraestructura ya próximos a los 200 millones de dólares. La declaración de la economía de guerra en la zona del Pacífico ha sido seguida de una segunda prórroga del estado de emergencia, de una reducción en los subsidios a varios productos, de la nacionalización de los canales de distribución de otros y de la emisión de una ley de defensa del consumidor.

En esta re-orientación de la economía ha incidido también la intensa movilización del régimen sandinista para enfrentar la agresión militar norteamericana y contrarrevolucionaria, principalmente en los departamentos fronterizos con Honduras. La urgente necesidad de destinar recursos para la defensa ha llevado a congelar algunos programas de sectores importantes como salud y defensa.

La administración Reagan, sin embargo, ha encontrado serias dificultades para continuar

con su apoyo financiero a la contrarrevolución. No hay suficiente respaldo en el Congreso para aprobar los fondos necesarios, aunque algunos funcionarios han dejado ver con claridad que los pueden conseguir en otras fuentes. La contrarrevolución, por su parte, ya empieza a experimentar dificultades por la falta de recursos. Las fuerzas de tarea que penetraron en el territorio nicaragüense están a la defensiva y según algunos al borde de la desesperación. Honduras los ha forzado a cerrar dos instalaciones militares claves para el abastecimiento de las fuerzas que están operando en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno hondureño se enfrenta ahora a otra dificultad con la cual no contaban, la ubicación de los miles de combatientes cuando abandonen las montañas de Nicaragua y busquen refugio en Honduras.

En el frente sur hay también dificultades. Un sector de ARDE se unió al FDN, según los deseos de la CIA, pero teniendo que expulsar de sus filas a Pastora, quien después del atentado contra su vida y del fracaso militar, parece que se dedicará a la lucha política electoral, si es que el gobierno nicaragüense se lo permite. Mientras tanto, una ofensiva de las fuerzas sandinistas está virtualmente expulsando a las fuerzas de ARDE del sur de Nicaragua. En Costa Rica ha tenido que declararse estado de emergencia para afrontar el continuo flujo de desertores, heridos y combatientes que buscan refugio.

Los sandinistas continúan dispuestos a dialogar con Estados Unidos. La administración Reagan también parece dispuesta a mantener abierta la posibilidad del diálogo por si acaso lo necesita en el futuro. Por ahora, le es útil para satisfacer al Congreso y a la opinión pública, quienes exigen una salida política. Shultz planteó cuatro puntos al comandante Ortega para abonar el terreno de las negociaciones, no exportar la revolución, suprimir los asesores militares del campo socialista, reducir la fuerza militar y promover el pluralismo político (elecciones, libertad de prensa, derechos humanos) y la economía mixta. El comandante respondió que estaba dispuesto a tratar asuntos relacionados con la seguridad de Estados Unidos y otros aspectos de su política exterior, pero sin ceder a los principios de independencia y soberanía. A cambio pidió un compromiso serio de la administración Reagan para poner fin a las maniobras militares conjuntas en la región, cesar con el espionaje aéreo, el minado de los puertos, el apoyo a la contrarrevolución.

lución y congelar las instalaciones militares en Centroamérica.

De parte de Managua hay más bien escepticismo sobre el resultado de estas conversaciones. Y Washington le da la razón, pues el Departamento de Estado afirmó que los objetivos norteamericanos en Nicaragua seguían inalterables. La Casa Blanca tampoco ha bajado el tono de su retórica ante Nicaragua. El presidente Reagan no desperdicia oportunidad para insultar al gobierno sandinista.

Guatemala enfrenta también una profunda crisis económica similar a la de Honduras y Costa Rica. En estos momentos ni siquiera está produciendo lo que consume, siendo necesario importar productos básicos de consumo. Las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, desaparecimientos, torturas y asesinatos, sobre todo de universitarios, siguen de forma incontenible. La crisis ha alcanzado también el sistema judicial, al cual han renunciado más de 20 profesionales del derecho en protesta por las inadmisibles interferencias del ejército. Pero todo esto ha pasado a un segundo plano ante un proceso electoral para asamblea constituyente amarrado. El general de turno no dará libertad completa a dicha asamblea bajo amenaza de disolverla.

Esta lamentable realidad centroamericana se quiere disimular presentando una imagen democrática tanto dentro como fuera del área. Todos los gobiernos actuales, excepto el de Nicaragua, son democráticos o se encaminan hacia la democracia. De este modo se espera consolidar un poder civil y un ejercicio limitado de procesos electorales que justifiquen la intervención norteamericana. Las elecciones nicaragüenses programadas para finales de este año ya no se aceptan como válidas arguyendo que votarán los miembros del ejército (cosa que también quiere la derecha salvadoreña en su caso), los jóvenes mayores de 16 años, el rechazo de los observadores extranjeros, el control y las reglas del proceso,

etc. En cambio se han aceptado las de Guatemala a pesar de todos los condicionamientos y limitaciones impuestas por el ejército. Durante la campaña electoral la violencia política crónica del país se extendió hasta los partidos políticos. Hasta ahora nadie ha protestado ni ha pedido investigaciones. Aparte de que el partido ganador en las elecciones guatemaltecas fue el de los votos nulos e invalidados. También se han estado cantando las glorias del régimen civil de Honduras, donde el presidente no fue consultado cuando los oficiales jóvenes decidieron prescindir del general Alvarez, íntimo asociado del presidente Suazo. Asimismo, se guarda silencio sobre las crecientes violaciones a los derechos humanos. Todo esto se oculta alabando los beneficios inconmensurables de la libertad de estos regímenes constitucionales.

Hasta ahora Estados Unidos no se ha preocupado por lo que sería lo mejor para el pueblo centroamericano. En el mejor de los casos, mira por lo que será bueno para "la democracia" al estilo norteamericano, dando por supuesto que lo bueno para ese tipo de democracia será bueno para el pueblo centroamericano.

En efecto, Estados Unidos está atrapado dentro de un viejo dilema, para preservar sus intereses a largo plazo debe promover cambios sociales y políticos radicales. Sin embargo, para evitar cambios demasiado radicales y el subsiguiente riesgo de una influencia soviético-cubana, debe depender de la cooperación de las fuerzas más hostiles al cambio. Las políticas actuales enajenan a la izquierda, pero sin derrotarla e incrementar la dependencia de la derecha de Estados Unidos, aunque sin poder garantizar tampoco los cambios necesarios. Mientras los funcionarios de la administración norteamericana deciden como salir del dilema, la guerra regional continúa con un costo intolerable e inadmisible de vidas humanas y en destrucción de la infraestructura centroamericana.

S.J.